

# Otoño caliente.

VIDAL MATE

Coincidiendo con la falta de actividad oficial, durante los últimos años el mes de agosto ha sido escenario de alguna guerra en el sector agrario consecuencia generalmente por los bajos precios. Cereales, girasol y, este año la patata han sido causa de movilizaciones que, tradicionalmente también, no han encontrado respuesta.

Pero, al margen de estas actuaciones puntuales, agosto suele ser una especie de tiempo muerto en el debate sobre política agraria que esta campaña se presenta con especial fuerza una vez ha sido aprobada por la Comunidad Europea la reforma de la Política Agrícola Común y, cuando se deben poner en marcha todos los mecanismos para su aplicación a muy corto plazo.

El Ministerio de Agricultura, tal como se ha relatado en estas páginas, al hilo de esa reforma de la Política Agrícola Común, hizo una oferta a las organizaciones agrarias para acometer un programa amplio y excesivamente abstracto encaminado a modernizar la estructura de las ex-

plotaciones agrarias españolas para hacerlas más competitivas. Este programa-oferta fue debatido entre los sindicatos y la Administración durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Ambas partes, Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias se habían dado un plazo hasta el 15 de julio pasado para hacer una valoración de los resultados de esas negociaciones. Si el balance era satisfactorio y se veía en la Administración una clara voluntad de resolver los problemas de campo, los sindicatos seguirían negociando. Si por el contrario, no se observaba esa voluntad oficial, los representantes agrarios romperían las mesas de trabajo y pasarían a la confrontación.

El pasado 15 de julio, a la hora de los balances, la pelota seguía sobre el tejado. Las organizaciones agrarias reconocieron la existencia de una voluntad de diálogo en el Ministerio de Agricultura, una actitud evidentemente positiva. Pero advirtieron a su vez que con actitudes negociadoras no se iba a ninguna parte, si a la par no se arbitaban medidas económicas suficientes para resolver los problemas que tiene planteados el sector agrario. Ante un Ministerio que aboga por la negociación y el diálogo, no resulta fácil romper unas mesas de trabajo como podía suceder en su tiempo con Carlos Romero. Pero, los sindicatos ya están también cansados de buenas palabras, de cortesías negociadoras, si por detrás no se refleja esa voluntad en compromi-

dos presupuestarios.

De los problemas coyunturales que se habían propuesto resolver organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura y los sindicatos antes de verano, se puede decir que todos siguen pendientes y que, cuando se arbitraron soluciones, no fueron a gusto de los sindicatos.

Ante los problemas de estructura del campo español y que también se contemplaban en ese programa marco, las organizaciones agrarias, antes de romper sus negociaciones con el Ministerio de Agricultura y pasar a un otoño caliente, solamente aguardan a conocer las disposiciones presupuestarias que va a tener este departamento para el próximo año. Septiembre va a suponer probablemente conocer una primera aproximación de esos recursos y, sobre todo, si existe o no voluntad política en el gobierno para tener en cuenta lo que puede suponer para el campo de este país la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común. Una primera impresión es que Agricultura no va a tener un especial tratamiento presupuestario y, de esta forma, mal se puede acceder a todas las posibilidades de ayuda que se contemplan desde Bruselas. Esta actual falta de fondos y la que se supone también para 1993, hace que Agricultura trabaje más en la elaboración de nuevas disposiciones, libros blancos, etc... que no cuestan un duro, en lugar de hacer frente a compromisos concretos con dineros sobre la mesa. Esta situa-

**E**sta campaña se presenta con especial fuerza una vez ha sido aprobada por la Comunidad Europea la reforma de la Política Agrícola Común y, cuando se deben poner en marcha todos los mecanismos para su aplicación a muy corto plazo.

ción ya se ha puesto de manifiesto con motivo de las medidas de ajuste presupuestario propuestas por Economía antes de verano y aprobadas por el Parlamento. Agricultura y, sobre todo, la secretaría general de Estructuras, ha sido uno de los departamentos más afectados, cuando en teoría el objetivo prioritario es lograr la modernización de las explotaciones.

A la espera de este debate a fondo sobre el futuro de la política agraria en este país que se debe reflejar en la actitud oficial ante los próximos Presupuestos Generales del Estado, hay razones para pensar que nos hallamos a las puertas de un otoño caliente en el campo. Parece difícil que se vayan a destinar al sector los recursos necesarios en un año como este de ajuste para el conjunto de la economía y sería un milagro que de repente se desatase una sensibilidad especial en Economía para un sector tradicionalmente marginado o utilizado descaradamente para controlar mejor el IPC.

Los sindicatos agrarios, por diferentes razones entre las que no se debe dejar a un lado el compromiso de Agricultura para reconocer a tres siglas, Asaja, Coag y Upa como sindicatos representativos con las correspondientes ayudas para su funcionamiento al margen de un nuevo proceso electoral, hasta la fecha han mantenido un talante negociador y dialogante. A partir de este otoño, con un proceso de elecciones generales casi a las puertas, parece lógico pensar que se puede producir esa ruptura y más si no hay importantes disponibilidades presupuestarias. La patata ha sido este verano el primer detonante de esta situación y tras ella

pueden seguir otros como el girasol o los cereales. Hay un problema en el campo de bajos precios desde los agricultores cerealistas de las mesetas hasta el vino y las producciones frutícolas que está contribuyendo al deterioro de las rentas y un malestar creciente entre los agricultores. En otoño puede estallar este cóctel en las manos de un ministro de Agricultura hábil, de buen talante, de mejores formas, que prefiere el entendimiento y el pacto a la confrontación sindical pero al que se le pide ya algo más que buenas formas.

Los meses de otoño, tras el proceso desarrollado durante el primer semestre de este año, deberán ser escenario de la asignación provisional de las cuotas lácteas. En el mes de mayo se produjo en cese en la actividad de unos 17.000 ganaderos con 650.000 toneladas de producción en sus manos. Es probable que parte de esa leche abandonada se siga produciendo en el sector a través de otras explotaciones mientras las inspecciones oficiales no llegan a cada una de esas ganaderías. Pero, con la aplicación provisional de las cuotas y, probablemente tras el abandono de otras 200.000 toneladas que restan para ajustar la producción real a la cuota asignada, el sector productor de leche de vaca puede sufrir una convulsión que hasta la fecha han ocultado las actuaciones ilegales.

Finalmente, en el panorama agrario de estas fechas, cabría hacer referencia a los precios a la baja que dominan casi todos los sectores de la producción desde las frutas ante una buena cosecha hasta los cereales, a pesar de ser una de las más bajas de los últimos años. La re-

**E**sta actual falta de fondo y la que se supone también para 1993, hace que Agricultura trabaje más en la elaboración de nuevas disposiciones, libros blancos, etc... que no cuestan un duro, en lugar de hacer frente a compromisos concretos con dineros sobre la mesa.

alidad es que, cuando hay exceso de oferta nacional los precios se hunden sin que hay mecanismos para regular el mercado y que cuando haya cosechas a la baja, los precios tampoco suben al funcionar a tope las importaciones. Una situación que no deja de ser para el sector el mejor aviso de lo que van a ser los mercados en los próximos años ante el proceso de liberalización total que ya está en marcha.

**S**eptiembre va a suponer conocer, si existe o no voluntad política en el gobierno para tener en cuenta lo que puede suponer para el campo de este país la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común. El Ministerio de Agricultura no va a tener un especial tratamiento presupuestario y, de esta forma, mal se puede acceder a todas las posibilidades de ayuda que se contemplan desde Bruselas.